

USCIRF—RECOMMENDED FOR SPECIAL WATCH LIST

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) es una comisión independiente y bipartidista del gobierno federal de Estados Unidos que vigila el derecho universal a la libertad religiosa o de culto en el exterior. La USCIRF, creada por la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998, utiliza normas internacionales para vigilar las violaciones a la libertad religiosa o de culto en el exterior y hace recomendaciones en materia de políticas al presidente, el secretario de Estado y el Congreso. La USCIRF es un ente independiente y diferenciado del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Informe Anual 2020 constituye la culminación de un año de la labor realizada por los comisionados y el personal profesional para documentar los abusos sobre el terreno y hacer recomendaciones independientes sobre políticas al gobierno de Estados Unidos. El Informe Anual 2020 abarca el período que va desde enero de 2019 hasta diciembre de 2019, aunque en algunos casos se mencionan eventos relevantes que ocurrieron antes o después de este marco de tiempo. Para obtener más información sobre la USCIRF, visite el sitio web [aquí](#) o contáctese directamente con la USCIRF llamando al 202-523-3240.

HALLAZGOS CLAVE

Durante el año 2019, la situación de la libertad religiosa en Cuba mostró una tendencia negativa. La nueva constitución adoptada en abril modificó las protecciones a la libertad religiosa, y el gobierno atacó de manera agresiva a los líderes religiosos que se oponían a estos cambios. Si bien sigue siendo un desafío recopilar información sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba, una organización no gubernamental [documentó](#) 260 casos de violaciones a la libertad religiosa o de culto en Cuba durante 2019, incluidos actos de hostigamiento, arrestos y prohibiciones de viaje, lo que supuso un aumento en comparación con los 151 casos de violaciones registrados en 2018. Los líderes religiosos que [expresaron su preocupación](#) en el sentido de que la nueva constitución debilitaba las protecciones a la libertad religiosa [fueron sometidos a grandes presiones y hostilidades](#) durante el período que precedió el referendo constitucional en febrero. Entre las tácticas empleadas para presionar a los líderes religiosos cabe mencionar el envío de citaciones policiales y los interrogatorios reiterados, las amenazas de detención y la calificación de “[contrarrevolucionarios](#)” a los líderes religiosos. El sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo inició una [huelga de hambre](#) de 15 días como protesta por el hostigamiento contra él y su familia en el período previo al referendo constitucional.

La [Oficina de Asuntos Religiosos \(OAR\)](#), entidad del Partido Comunista de Cuba que depende del Ministerio de Justicia, mantuvo un control férreo sobre la actividad religiosa. La OAR exige que las organizaciones religiosas soliciten el registro oficial al Ministerio de Justicia. La pertenencia o asociación a un grupo religioso no registrado es un delito. La OAR ejerce un control directo y arbitrario sobre los asuntos de las organizaciones religiosas, al solicitarles permiso para llevar a cabo prácticamente todas las actividades que no sean ofrecer los servicios de culto regulares. Los funcionarios de alto nivel del Partido Comunista de Cuba usan el sistema de permisos para intervenir en los asuntos de los grupos religiosos y ejercen coacción para obtener la cooperación con los funcionarios del gobierno.

Posteriormente al proceso constitucional, el gobierno cubano llevó a cabo campañas persistentes de hostigamiento e

intimidación en contra de los líderes religiosos durante 2019. Entre las tácticas más frecuentes se encontraron las amenazas, detenciones por corto tiempo, restricciones de viaje y violencia en contra de algunos líderes religiosos. Las autoridades cubanas [manipularon](#) las leyes para acusar o amenazar con acusar a líderes religiosos de haber cometido violaciones penales y civiles por realizar actividades religiosas pacíficas y trabajos sociales. Durante el período al que se refiere este informe, el pastor Alain Toledano Valiente del Movimiento Apostólico fue [citado](#) en varias ocasiones a la estación de policía, [acusado](#) del delito de “desobediencia” y amenazado con ser detenido y con la confiscación de la propiedad de la iglesia. El acoso guardaba relación con sus actividades religiosas, incluida la organización de eventos sobre el papel de la [mujer](#) y la [juventud](#) en la sociedad. Después de decidir educar a sus hijos en casa debido a su preocupación respecto de la promoción del socialismo y el ateísmo en las escuelas cubanas, el pastor Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito Leyva, fueron [condenados](#) en abril por “asociación ilícita” —puesto que su iglesia no estaba registrada— y otros cargos, incluyendo actos contrarios al normal desarrollo de sus hijos. Adya Expósito fue [liberada](#) después del período al que hace referencia este informe, en marzo de 2020. En diciembre, las autoridades [amenazaron](#) con cargos legales similares a Olainis Tejeda Beltrán y Lescaille Prebal, miembros de la comunidad judía sefardita del Bnei Anusim, tras el hostigamiento y las agresiones físicas que sufrieron sus hijos en la escuela y que dieron lugar a la [prohibición del uso del kipá](#). [Se calcula](#) que hay 1200 judíos en Cuba. Hasta noviembre de 2019, se había prohibido arbitrariamente la salida de Cuba a aproximadamente 20 [líderes religiosos](#) durante el año. La OAR está efectivamente aislando a las comunidades religiosas al impedir cada vez más que visitantes extranjeros visiten a sus correligionarios, mientras que al mismo tiempo imposibilitan que los [líderes religiosos](#) salgan de la isla. Siete denominaciones se separaron del Consejo de Iglesias de Cuba y formaron la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba. Los miembros de esta alianza fueron [atacados de manera agresiva](#) durante el proceso constitucional y se mantuvo el [hostigamiento](#) contra ellos en represalia por su organización y defensa constitucional, el cual incluyó la negativa

a permitir el ingreso de visitantes extranjeros. En particular, las autoridades cubanas [impidieron](#) que cuatro miembros de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, junto con otro líder

religioso, viajaran a Estados Unidos para asistir a la [Convención Ministerial para Promover la Libertad de Religión](#), organizada por el Departamento de Estados Unidos en julio.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

- Seguir incluyendo a Cuba en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado de Estados Unidos por cometer o tolerar violaciones graves a la libertad religiosa, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional.
- Imponer sanciones selectivas a los organismos y funcionarios del gobierno cubano responsables de violaciones graves a la libertad religiosa —incluyendo a Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR)— mediante el congelamiento de sus activos o la prohibición de su ingreso a Estados Unidos, con arreglo a lo previsto en materia regulatoria financiera y de visas en el contexto de los derechos humanos, invocando violaciones específicas a la libertad religiosa.
- Asegurar que los programas que apoyan el periodismo independiente en Cuba ayuden de manera eficaz a los periodistas que enfrentan mayor hostigamiento por denunciar la situación de la libertad religiosa.
- Permitir el procesamiento de visas en La Habana para los líderes religiosos y los activistas y periodistas que defienden las protecciones a la libertad religiosa, a fin de facilitar que puedan viajar a Estados Unidos sin necesidad de pasar por un tercer país.

RECURSOS Y ACTIVIDADES CLAVE DE LA USCIRF

- **Actualización sobre Políticas:** [Libertad Religiosa en Cuba en 2019](#)
- **Comunicado de Prensa:** [Prohibición del gobierno de Cuba de asistir a reunión internacional sobre libertad religiosa a líderes religiosos](#)
- **Comunicado de Prensa:** [Condena de la ofensiva de las autoridades cubanas contra el pastor y su esposa que optaron por educar a sus hijos en el hogar](#)

Antecedentes

Aunque no existe una fuente independiente sobre la demografía de los grupos religiosos en Cuba, se [informa](#) que entre el 60 y el 70 por ciento de la población total estimada en 11,1 millones se identifica como católica, mientras que los protestantes representan un 5 por ciento. Aproximadamente entre el 25 y el 30 por ciento de la población se declara sin afiliación religiosa o se identifica con otra religión, incluidas las religiones sincréticas (así como también santería, testigos de Jehová, metodistas, adventistas del séptimo día, anglicanos, presbiterianos, episcopalianos, musulmanes, judíos, cuáqueros, moravos y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días). Cuba es un sistema unipartidario sin poder judicial independiente, en el cual el estado controla rigurosamente las instituciones religiosas. En abril de 2019, se adoptó una nueva constitución, tras la realización de las llamadas “consultas públicas” y de un referendo. La nueva [constitución mantiene](#) el sistema comunista unipartidario y [modifica](#) las protecciones a la libertad religiosa o de culto al eliminar las referencias específicas anteriores a la libertad de conciencia y al cambio de creencias religiosas. La USCIRF vigilará rigurosamente la implementación

de estas nuevas disposiciones constitucionales para evaluar su incidencia en la libertad religiosa.

Junto con la constitución, el gobierno usa un sistema restrictivo de leyes y políticas, vigilancia y hostigamiento para controlar a los grupos religiosos y suprimir la libertad de religión o culto. La OAR y otras autoridades gubernamentales dan cumplimiento en forma represiva a estas restricciones para garantizar el control estricto sobre los líderes religiosos, los miembros de las comunidades religiosas y otras personas que se consideran amenazas para la agenda comunista debido a su apoyo o defensa de la libertad religiosa.

Negación de la libertad religiosa para activistas y periodistas independientes

Durante el año 2019, el gobierno de Cuba violó frecuentemente la libertad religiosa de activistas defensores de la democracia y los derechos humanos. Periodistas independientes fueron blanco de ataques por documentar y denunciar la situación de la libertad religiosa. En los casos más graves, tuvo lugar la detención de periodistas, como [Roberto Jesús Quiñones Haces](#) y [Ricardo Fernández Izaguirre](#). Entre otras tácticas empleadas para intimidar a los periodistas y otros activistas defensores de la

libertad religiosa cabe mencionar los interrogatorios, el hostigamiento legal y las restricciones de viaje. Las autoridades cubanas también negaron a periodistas y activistas por los derechos humanos el derecho a la libertad de religión o culto, bloqueando a menudo su acceso a los servicios religiosos, incluidos [eventos religiosos especiales](#). Funcionarios del gobierno [presionaron](#) a líderes religiosos para que expulsaran a miembros de sus congregaciones que participaban en actividades políticas o en la defensa de los derechos humanos, o que habían sido calificados de “contrarrevolucionarios”.

Los intentos más sistemáticos y graves de impedir la asistencia de activistas a servicios religiosos tuvieron lugar en contra de las Damas de Blanco, quienes son esposas y familiares de disidentes que fueron encarcelados en 2003. Cada domingo durante el período al que se refiere este informe, las autoridades cubanas [detuvieron](#) a integrantes del movimiento de las Damas de Blanco cuando salían a misa y a otros servicios religiosos. Según los [informes](#) disponibles, a menudo se informó a las integrantes del movimiento Damas de Blanco que estaban siendo detenidas porque no tenían permitido asistir a los servicios religiosos.

Restricciones a los recintos religiosos

En Cuba, es ilegal realizar actividades religiosas en recintos no destinados a usos religiosos. Las organizaciones religiosas deben recibir autorización de la OAR —la cual rara vez se concede— para realizar obras de renovación o construcción de las sedes religiosas. Estas restricciones, aunadas al crecimiento de las comunidades de fe, han limitado de forma significativa el derecho de muchos cubanos a profesar su fe en la comunidad.

El gobierno de Cuba también usó una ley de 2005 que regula las casas de culto para imponer requisitos complicados y represivos a las residencias privadas utilizadas como lugares de culto protestante en Cuba, de las cuales se calcula que existen entre 2,000 y 10,000. Esta [ley](#) contempla la exigencia del registro de acuerdo con procedimientos estrictos, como el requisito de que no pueden existir dos casas de culto del mismo grupo religioso registrado a menos de dos kilómetros de distancia entre sí. La ley también faculta a las autoridades a supervisar y controlar las actividades religiosas de estos grupos. Se informó sobre visitas frecuentes por parte de los agentes de seguridad del estado a las casas de culto. Los grupos religiosos no registrados no podían solicitar la legalización de los recintos utilizados para servicios religiosos, y se exponían a ser penalizados por congregarse en lugares no autorizados.

En relación con acontecimientos positivos, en enero la Iglesia católica [inauguró](#) la primera de tres iglesias nuevas que se construyen desde la revolución socialista en 1959. Después de

que la OAR [revocara en forma arbitraria](#) el permiso de la Iglesia bautista de Maranatha para construir una iglesia nueva en abril, el máximo órgano de gobierno y administrativo del Partido Comunista de Cuba anuló la decisión de la OAR en octubre. Si bien este caso demuestra el control de alto nivel que ejerce el Partido Comunista de Cuba en los asuntos de las comunidades religiosas, es un avance positivo que se haya permitido continuar con la construcción de la iglesia.

POLÍTICA CLAVE DE ESTADOS UNIDOS

La política del gobierno de Trump hacia Cuba se basa en el [Memorando Presidencial de Seguridad Nacional](#) denominado "Fortalecer la Política de los Estados Unidos hacia Cuba", que se emitió en noviembre de 2017. Esta política se centra en la necesidad de derechos humanos, democracia y libre empresa en Cuba. En 2019, el gobierno de Trump impuso una [serie de sanciones](#) en contra de Cuba por su deficiente historial en materia de derechos humanos y su apoyo al gobierno de Maduro en Venezuela, las cuales incluyeron restricciones de visa para el [expresidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro](#), en el mes de septiembre. Asimismo, en septiembre, el Departamento de Estado [emitió](#) una declaración en la que condenaba las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Después de que diplomáticos estadounidenses y sus familias presentaran problemas de salud inexplicables entre 2016 y 2018, la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzó a funcionar con un personal permanentemente reducido y [actividades limitadas](#), incluida la tramitación de visas. El Departamento de Estado [anunció](#) en marzo de 2019 que estaba eliminando la visa de múltiples entradas de cinco años para los cubanos, la cual sería sustituida por una visa de una sola entrada con una validez de tres meses. La mayoría de los solicitantes de visa de no inmigrante, incluidos los líderes religiosos que viajan a Estados Unidos para reunirse con sus correligionarios o asistir a reuniones sobre libertad religiosa o culto, deben viajar actualmente a un tercer país para obtener una visa, lo cual suele ser prohibitivo y en algunos casos especialmente complicado debido a las restricciones de viaje. El 18 de diciembre, el Departamento de Estado [incluyó](#) por primera vez a Cuba en su Lista de Vigilancia Especial para gobiernos que han cometido graves violaciones de la libertad religiosa.

OPINIÓN PERSONAL DEL COMISIONADO JOHNNIE MOORE

A mi juicio, la USCIRF no debería recomendar que se incluya a Cuba en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado. Debería recomendarse su designación como “país de especial preocupación”. Sus acciones siguen siendo continuas, sistemáticas y atroces.